

Mesas participativas, beneficios negociados: el caso del proyecto de recuperación de áreas degradadas en Puno

Participatory tables, negotiated benefits: the case of the project for the recovery of degraded areas in Puno

JORGE LUIS ROJAS RUNCIMAN¹
Universidad Nacional Federico Villarreal
jrojasr@unfv.edu.pe

Recibido: 04 de julio 2024

Aceptado: 10 de octubre de 2024

Resumen

Desde las instituciones estatales, las mesas de participación ciudadana son presentadas como mecanismos democráticos que permiten la toma de decisiones responsables y que traerán beneficios para la sociedad civil. En este trabajo, las mesas de participación son entendidas como “ensamblajes” porque reproducen las prácticas y jerarquías del espacio público local. Durante las mesas de participación ciudadana del proyecto de recuperación del ex botadero de la ciudad de Puno, la comunidad campesina Cancharani desplegó una serie de estrategias para obtener mejores beneficios con base en sus intereses y necesidades.

Palabras clave: Participación Ciudadana, Comunidad Campesina Cancharani, ensamblaje, gobernanza

Abstract

From state institutions, citizen participation tables are presented as democratic mechanisms that allow responsible decision-making and that will bring benefits to civil society. In this work, the participation tables are understood as “assemblies” because they reproduce the practices and hierarchies of the local public space. During the citizen participation tables of the recovery project of the former dump in the city of Puno, the Cancharani peasant community deployed a series of strategies to obtain better benefits based on their interests and needs.

Keywords: Citizen Participation, Cancharani Peasant Community, assembly, governance

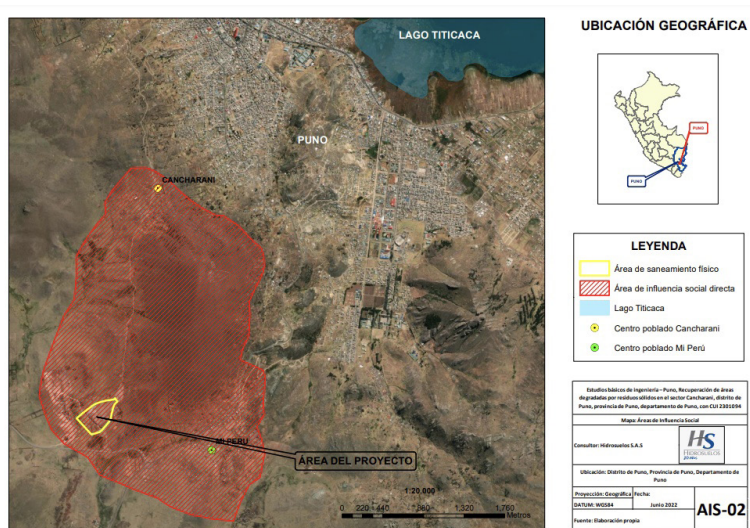
*“¿Y qué gano con esos “beneficios”, acaso me darán de comer?”
Teresa, comunera*

¹ Profesor de la Especialidad de Antropología de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

1 Introducción

El ex botadero municipal de la ciudad se ubica a 6 km de la ciudad de Puno, próxima a la carretera que une Puno con Moquegua. Éste se construyó dentro de los terrenos de la comunidad campesina Cancharani, ocupando un aproximadamente 4.3 hectáreas y su tiempo de operación fue desde la década de 1980 hasta el 20 de julio del 2024, cuando se clausuró definitivamente a raíz de la construcción del relleno sanitario en el sector Itapalluni. El MINAM, a través de la Unidad 003-Gestión Integral de la Calidad Ambiental implementó un proyecto para recuperar esta área; entre junio y octubre del 2022 se desarrollaron las actividades del Expediente técnico, mientras que la etapa constructiva ocurrió entre julio a diciembre del 2023. El autor de este artículo participó como Especialista Social de la empresa consultora “Hidrosuelos” durante la etapa de diseño. Mi participación no se limitó únicamente a desarrollar las actividades sociales correspondientes a esta etapa, sino que me permitió observar la forma cómo las diversas partes involucradas en este proyecto lo interpretaban de acuerdo con sus necesidades e intereses. Para este trabajo, sólo me concentraré en las acciones que impulsaron a los pobladores de la comunidad de Cancharani a tomar una posición más política durante el desarrollo de las mesas participativas.

Figura 1: Ubicación del botadero Cancharani



Fuente: Empresa Hidrosuelos, 2022.

En las mesas de participación ciudadana, el objetivo principal era presentar el proyecto, explicar los diseños de la infraestructura y difundir los beneficios ambientales que traía consigo. La exposición estuvo a cargo de la consultora y, una vez concluida, se abrió el espacio para las preguntas y comentarios; las participaciones estuvieron muy marcadas por la pertenencia a una organización social o institución. Por ejemplo, aquellos pertenecientes a entidades técnicas, como el Colegio de Ingenieros (CIP) y el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA), se concentraron en los aspectos técnicos y normativos. En cambio, aquellos participantes pertenecientes a las organizaciones sociales lo hicieron de forma política al plantear ciertas demandas. Éste fue el caso de los

comuneros de Cancharani.

En primer lugar, cuestionaron el concepto de “beneficio” planteado por el proyecto, con base en experiencias previas con las entidades públicos. Una de sus principales críticas fue que no se les informó sobre el cierre del botadero y esto perjudicó a la asociación de recicladores que existía en la comunidad, porque se quedaron sin su principal fuente de ingresos. Segundo, no estaban de acuerdo con que esa área sea considerada intangible porque, para los comuneros, ésta había sido “prestada” y volver al control comunal. Por último, con la ejecución del proyecto, Cancharani debería ser la única beneficiaria con la contratación de mano de obra porque la obra se ejecutaría dentro de los territorios comunales. Esta participación demostraba esta capacidad de agencia de los comuneros para buscar mejores beneficios. Ellos son muy conscientes de sus niveles de poder e impacto de cara al proyecto, aprovechando los mecanismos participativos para generar consensos con los representantes de las instituciones estatales locales y nacionales. Por esta razón, las mesas de participación ciudadana no son solo mecanismos que permiten la inclusión de actores en la toma de decisiones responsables, sino que me sirve como ventana para estudiar la forma de gobernanza local y que impacta directamente en el desarrollo de los proyectos de desarrollo.

2 Marco Teórico

2.1 Construyendo la gobernanza

Para este artículo, utilicé los conceptos de Estado propuesto por Fernando Coronil (2010) y Gerardo Damonte (2021). El primero concibe al Estado como un ensamblaje de prácticas, instituciones e ideologías que sirven para gobernar. Gerardo Damonte (2021) considera al Estado como un grupo de relaciones sociales donde diferentes actores luchan por el control sobre el poder y aparato de gobernanza, las intervenciones gubernamentales necesitan ser negociadas y coordinadas de forma interna. A diferencia de la Ciencia Política, cuyos conceptos sobre el Estado son más monolíticos, los propuestos por la antropología son más flexibles debido a las prácticas, interrelaciones y límites existentes en las localidades.

Susan Rice y Stewart Patrick, al estudiar la esfera económica, política, seguridad y bienestar social de 141 estados en vías de desarrollo, elaboraron un modelo descriptivo que les permite definir sus debilidades y fortalezas con base en su efectividad, sensibilidad y legitimidad alrededor de las actividades gubernamentales. A grandes rasgos, consideran que un Estado es “débil” porque no cumple con generar un clima que promueva un crecimiento económico sostenible y equitativo, no mantiene la transparencia de sus instituciones, no mitiga la violencia ni controla su territorio y, por último, no provee las necesidades básicas de su población (2008). Los antropólogos Tanja A. Börzel, Thomas Risse, y Anke Draude no están de acuerdo con la propuesta de Rice y Patrick porque la “debilidad estatal” no es exclusiva de los países en vías de desarrollo sino de todos. Piden no concentrarse en la forma como actúa el Estado sino preguntarse en qué condiciones pueden proveer estructuras para gobernar y la calidad de los bienes y servicios públicos. Recuerdan que en la actualidad los estados, sus sistemas políticos y visión de desarrollo siguen la lógica y racionalidad occidentales, por esta razón, hay una serie de respuestas en las realidades donde son implementadas (2018).

La etnografía permite identificar las características específicas del Estado y sus instituciones, así como los límites de éstos. Los antropólogos deben considerar las dimensiones territoriales, sectoriales (que vinculan áreas políticas), sociales y temporales.

Esto permitirá al investigador a ir más allá de la calificación “bueno” o “fallido”, porque dentro de un territorio, pueden coexistir lugares “bien gobernados” próximos otros “mal gobernados”. Los autores abogan por un concepto de gobernanza que permita explicar cómo la población recibe los bienes y servicios del Estado que no es funcional, considerando la existencia de reglas, regulaciones e instituciones formales e informales. (Borzel, Risse, & Draude, 2018).

Desde la perspectiva institucional, la gobernanza es percibida como una herramienta política que aboga por un específico régimen gubernamental, con específicas divisiones de labores entre el Estado, la comunidad local, las empresas transnacionales, internacionales y privadas, es decir, involucra una heterogeneidad de actores que buscan un objetivo y que actúan bajo ciertos marcos normativos (Eckert, Behrends, & Dafinger, 2012). Se planteó el concepto de “Buena Gobernanza”, donde el manejo adecuado de los recursos debe reducir las brechas entre la relación Estado-sociedad, respetar los derechos humanos y civiles y contar con cuerpos burocráticos específicos para alcanzar estos objetivos.

Para la comprensión de la “Buena Gobernanza”, acudimos a Michel Foucault y su concepto de Gubernamentalidad. Para Foucault, el Estado es percibido como la correcta disposición de las cosas y que busca el bienestar de la población. Para alcanzar estos objetivos, el gobierno buscará modelar, de una forma específica, la conducta humana con base en una racionalidad e intereses específicos. A diferencia de la disciplina, que usa medios coercitivos, la educación es utilizada para moldear y persuadir al sujeto porque el mejoramiento de la condición humana está definido con determinados lineamientos estatales. (2006). Desde la etnografía, Tania Murray Li (2007) explica el concepto de Gubernamentalidad no puede aplicarse de forma generalizada porque no toman en consideración las prácticas ni conocimientos locales; esto lo demuestra en la implementación de proyectos de desarrollo.

A pesar de que se busca el mejoramiento de la calidad de vida de la población, basándose en conocimientos técnicos y científicos, el proyecto puede llegar a ser cuestionado o, lo que es peor, fracasar. Hay que tomar en cuenta que estos contextos poseen sus propios marcos interpretativos y que están vinculados con las condiciones locales (caóticas, contradictorias y coyunturales). Murray Li (2007) añade que los grupos locales están atravesados por la voluntad de gobernar, tal es así, que plantea el concepto de ensamblaje heterogéneo (**heterogeneous assamblage**), definiéndolo como un dispositivo que combina formas prácticas de conocimiento con modos de percepción, prácticas de cálculo, vocabularios, tipos de autoridad, formas de juicio, formas de arquitectura, capacidades humanas, objetos no humanos, dispositivos, inscripciones, técnicas, entre otras más. Rosemary J. Coombe (2007) agrega que el concepto de ensamblaje, abstracto, móvil y dinámico, se mueve a través de la sociedad, cultura y economía, siendo un elemento crucial para el estudio de la globalización desde la antropología. El estudio de los ensamblajes destaca las relaciones y procesos en los cuales están involucrados historias, solidaridades y vinculaciones que no se pueden cambiar con los planeamientos. Coombe utiliza concepto de **articulación** porque vincula los procesos discursivos con una identificación contingente, siendo clave para comprender los ensamblajes de instituciones, prácticas, discursos y aparatos con las formaciones globales. Esto permite conocer la posición de los sujetos frente a las instancias políticas y el grado de poder que poseen. Por último, Coombe señala que deben considerarse los conocimientos locales, porque son éstos los que deben apoyar en fracturar las injusticias y convicciones, lo que constituyen también los límites de la gubernamentalidad.

Por otra parte, Giorgio Blundo y Pierre-Yves Le Meur señalan que la aplicación de

este concepto de “Buena Gobernanza” no ha cambiado la percepción que se tiene sobre los Estados de países en vías de desarrollo, como los africanos, porque siguen siendo desacreditados por la corrupción y por tener un aparato burocrático que no cumple con sus funciones. Agregan que este concepto es hegemónico y descarta las prácticas locales, resultando paradójico que la “Buena Gobernanza” recomiende la formación de organizaciones sociales, con base en los marcos democráticos e inclusivos, pero no define cuáles son sus roles en este proceso. Para estos autores, los investigadores interesados en la Gobernanza no deben identificar a los múltiples actores involucrados sino tomar en cuenta su capacidad de negociación al momento de decidir sobre asuntos públicos a pesar de sus intereses particulares, antagonismos y conflictos entre las partes (Blundo & Le Meur, 2009).

En los países en vía de desarrollo y con pasado Postcolonial, la población es muy variada y heterogénea, por lo tanto, la forma de interacción entre el Estado con estos grupos sociales es muy variada. Partha Chatterjee explica que la relación entre el Estado y la sociedad ha cambiado, conduciendo a la creación de pequeños grupos de interés. Por esta razón, utiliza el concepto de “sociedad política” para referirse al conjunto de grupos que tienen intereses particulares y que en sus pretensiones conjugan elementos étnicos, territoriales, organizativos, capacidad de agencia y autorrepresentación. Al tratar ya no con un conjunto homogéneo, *sociedad civil*, sino fragmentado, *sociedad política*, el Estado abre espacios para la negociación directa con estos grupos. Estos grupos defenderán sus propios derechos particulares sobre el “interés en común” y la idea del “deber” frente al otro (Chatterjee, 2007). Esto nos permite comprender las razones del por qué, a pesar de contar con una autoridad política elegida, no se tomen decisiones de forma jerárquica, sino que se abren espacios para que exista una horizontalidad; aquí, la autoridad puede llegar a ser negociada. Esta forma de gobernanza no jerárquica permite al investigador conocer los cálculos de los costos y beneficios que realizan los actores, la creación y manipulación de incentivos, así como sanciones para aquellos que no siguen los procedimientos existentes. También se puede observar las asimetrías de poder entre los actores involucrados y sus formas de interacción están en función de las lógicas de apropiación y acción comunicativa (acción no manipulativa, persuasión y aprendizaje) (Borzal, Risse, & Draude, 2018).

2.2 Las mesas de Participación Ciudadana y los intereses locales

Narcisca Medranda (2022) considera que la participación ciudadana, como toda práctica democrática, está definida y caracterizada de acuerdo con las circunstancias sociales, culturales e históricas de espacio dónde se implementa. Está determinada por la formación y la cultura política, de manera que, el reto es la formación de un discurso político acorde a las experiencias heterogéneas de los participantes. Desde los marcos normativos, las mesas de participación son percibidas como un espacio neutral y técnico donde la población puede dialogar sobre los impactos que los proyectos tendrían en la localidad con los ejecutores y funcionarios estatales. Este enfoque, de carácter más técnico, identifica a los actores locales como partícipes de su propio desarrollo, con el manejo de su propia información y la toma de decisiones independiente de los intereses de actores externos como ONG, Estado o empresas. Este modelo plantea una horizontalidad de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, pero en países como el nuestro, donde las instituciones democráticas están limitadas y presentan tintes aún autoritarios, las relaciones entre ambas continúa siendo jerarquizada y con poco impacto en la toma de decisiones (Panfichi, 2007).

Desde las ciencias sociales, se ha criticado este modelo participativo porque, a pesar de basarse en criterios científicos y técnicos, es percibida como única alternativa para el desarrollo de los proyectos. En el ensayo *Seeing Like a State* (1998), James Scott indicó que los proyectos tienen la intención de mejorar las condiciones de vida de las personas, basándose en criterios científicos, técnicos y marcos normativos y legales estatales. Este mejoramiento implica un cambio en los hábitos y costumbres de la población beneficiaria del proyecto, pero no manera inmediata sino progresiva y a través de un proceso educativo. Desde la antropología se ha demostrado que durante el diseño de estos proyectos no se toman en cuenta la historia, tradiciones ni prácticas de la localidad que será intervenida, limitando futuros cambios, ajustes y renovaciones de las propuestas planteadas. Como resultado, los sujetos que serán intervenidos no aceptarán de forma pasiva los “beneficios” que trae consigo un proyecto, sino que lo contestarán con base en sus experiencias, dinámicas y prácticas locales (Murray Li T., 2007).

Desde la etnografía, se ha observado que la población, al no contar el suficiente conocimiento técnico ni formación profesional, queda relegada, limitando su participación y empoderamiento frente a los demás actores involucrados (Estado y empresa privada), perpetuando así las relaciones jerárquicas entre ellos, de arriba hacia abajo, (*top-down*) (Berner, 2010). No obstante, la población no es un grupo pasivo que acepta los lineamientos del proyecto, sino que implementa una serie de estrategias, de carácter político, que les permite negociar y generar un balance en las asimetrías de poder, desplegando acciones de poder y simbólicos. Además, las organizaciones sociales locales buscarán mayor poder generando nuevas alianzas políticas para nivelarse, o sobrepasar, a los representantes del Estado utilizando estos mecanismos de participativos; esto podría ser calificado como una respuesta “desde abajo”. Ahora, con el desarrollo de estas negociaciones entre los grupos sociales, hay un impacto en las relaciones de poder al interior de la localidad porque pueden terminar promoviendo redes clientelares, faccionalismos y acciones autoritarias (Landa, 2004).

Volviendo a los mecanismos de participación, éste también es un espacio para la transformación, porque los actores conocen el nivel de poder que poseen, sin embargo, utilizan su capacidad de agencia para construir una relación con el Estado y otras organizaciones que operan en la localidad, con la particularidad que se implementan desde abajo. Con base en esto, existe una ritualización de las negociaciones entre los actores. Ruth Preciado, al estudiar las mesas de diálogo en Caylloma, observa las relaciones de poder de los participantes, y a pesar de que la mesa tiene procedimientos, se abren espacios para la negociación, a lo que denomina “la interacción contingente”. En las mesas de participación, se teatraliza la negociación mediante la escenificación del poder donde, tanto el gobierno central y regional, así como las organizaciones de la población local, persiguen diversos objetivos subyacentes (Preciado, 2023).

3 Metodología

Esta investigación se desarrolló en el distrito de Puno y la elección de este caso obedece a las siguientes razones: a) el incremento de proyectos para el adecuado tratamiento de los residuos sólidos; b) su implementación en espacios donde la población con un alto componente étnico ha desarrollado prácticas en torno a la segregación de residuos y c) las respuestas locales frente a este tipo de proyectos.

Para el análisis correspondiente, revisé información cualitativa y cuantitativa del MINAM sobre los proyectos de recuperación de áreas degradadas. Para la recolección de información primaria, realicé un trabajo de campo de mayo a septiembre del 2023 para

identificar a las diversas partes interesadas de este proyecto. Pude contactar con la junta directiva de la comunidad Cancharani para ir al lugar y recoger sus opiniones sobre el proyecto. Durante este trabajo de campo, tuve conversaciones informales y entrevistas, así como conversaciones telefónicas y reuniones virtuales debido a ciertas restricciones por la pandemia del COVID-19. De las interacciones con las partes interesadas pude contrastar las diferentes posiciones que asumen frente al proyecto, basadas en sus necesidades e intereses particulares.

Al formar parte de la Consultora Hidrosuelos, el equipo social fue el encargado de organizar dos talleres participativos. La municipalidad provincial de Puno brindó su auditorio para el desarrollo de éstos, lo que permitió la asistencia de los representantes de las entidades públicas y organizaciones sociales vinculadas con la gestión de los residuos.

4 Preocupados por la calidad ambiental de la población: El programa de recuperación de áreas degradadas en el Perú

En el Perú, la entidad nacional encargada de diseñar los lineamientos de la gestión de los residuos es el Ministerio del Ambiente (MINAM). Ha elaborado planes estratégicos y guías técnicas que siguen las normas internacionales, distribuyéndolos a las distintas unidades de gestión de residuos sólidos de los gobiernos locales. Esto les ha permitido elaborar Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Municipales (PIGARS), Planes distritales de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS), Optimización de Rutas, capacitaciones de personal, entre otros más.

En el 2016, el MINAM publicó “**El Plan Nacional de Gestión de los Residuos Sólidos. 2016-2024**”, cuyo capítulo 3 versa sobre el estado de gestión de residuos sólidos en el Perú y trata los siguientes puntos: 1) generación de residuos sólidos a nivel nacional y composición; 2) disposición final de residuos sólidos; 3) Recolección, transporte y disposición final; 4) Programa de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal; 5) Gestión administrativa del servicio de limpieza pública; 6) residuos del ámbito no municipal; 7) Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos; 8) Educación ambiental y participación ciudadana; 9) Instrumentos para la evaluación de la Gestión de Residuos Sólidos del país y 10) Modificación de la Ley General de Residuos Sólidos. De todos ellos, me interesa el referente a la disposición final de residuos sólidos.

Este informe explica la necesidad de reformar totalmente la disposición de los residuos porque solo el 19,7 % se hace en rellenos sanitarios mientras que el resto, el 80,3 %, se hace en botaderos municipales. En estos últimos, al ser espacios abiertos, los residuos no reciben ningún tipo de tratamiento técnico, provocando la contaminación del suelo, aire, agua, aparición de vectores y generación de enfermedades; también se desarrollan actividades económicas informales ligadas con el reciclaje. Los rellenos sanitarios, en cambio, sí poseen tecnología para manejar los residuos y, la mayoría, cuentan con plantas de tratamiento que transforman los residuos en objetos con un valor económico.² El MINAM se priorizó el diseño y ejecución de rellenos sanitarios a lo largo del Perú

² Susana Higuera explica que los conceptos de “basura” y “residuo sólido”, a pesar de ser considerados como equivalentes por las personas, están atravesados por nociones culturales y técnicas. En primer lugar, nos dice, el concepto de basura es un concepto académico y el de residuo práctico porque el primero es un concepto subjetivo que está enmarcado en un entramado de relaciones sociales y materiales, proporcionándole un valor simbólico específico y ubicándolo fuera de la estructura social. Incluso, a las personas que trabajan con la basura, como los recicladores, se les tiene cierto rechazo porque contribuyen con la contaminación ambiental. El concepto de **residuo sólido** posee una valoración económica porque son transformados en bienes de consumo a través del reciclaje (Higuera Carrillo, 2020)

Esta acción forma parte del **Plan Nacional de Acción Ambiental** (2009), porque en su capítulo titulado “Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas prioritarias”, se explica la necesidad de diseñar e implementar un sistema integral de recolección y tratamiento de los residuos sólidos municipales; la meta era beneficiar a 31 ciudades. Esto implicó la construcción de rellenos sanitarios y el desarrollo de acciones y procedimientos para el cierre definitivo de los botaderos municipales. Este programa debía cumplir con dos fases:

- **Fase 1:** Construcción de nuevos rellenos sanitarios y adquisición de equipos para mejorar la capacidad de recolección y transporte.
- **Fase 2:** Mejora del sistema de tratamiento de residuos a través de la clausura segura de los botaderos municipales existentes y recuperación del medio ambiente.

En la **Guía para la formulación del Plan de Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales** (2020), el MINAM indicó que las municipalidades son las entidades responsables en elaborar un perfil de proyecto de inversión para la construcción de un relleno sanitario y recuperar las áreas degradadas (ex botaderos). Este proceso puede tomar tiempo porque varias municipalidades no cuentan con el personal técnico necesario, y en ocasiones, ni la voluntad política para hacerlo debido a que los frutos de estos esfuerzos se verán reflejados en otra gestión municipal. Aquellas que elaboraron sus proyectos de pre-inversión, obtuvieron los presupuestos para la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obra. Entre los años 2019 y 2023, se construyeron rellenos sanitarios y recuperaron áreas degradadas (ex botaderos) en 29 ciudades³ con el financiamiento y apoyo técnico de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la ciudad de Puno, el 2016 se elaboró el expediente técnico del relleno y, para agosto del 2018, la empresa española Extraco S.A se adjudicó la obra, cuyo presupuesto fue 12 millones de soles. Ésta fue entregada en septiembre del 2019, dando paso a la segunda fase, es decir, el cierre del botadero municipal ubicado en el sector Cancharani. A continuación, presentaré algunas de las características de este botadero.

5 El Botadero de Cancharani: más que un repositorio de residuos sólidos

La municipalidad provincial de Puno (MPP), a través de su Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es la responsable del recojo, transporte y disposición de los residuos sólidos de la ciudad. Desde la década de 1980, la disposición final de los residuos era el botadero de Cancharani, a 6 km de la ciudad. Ubicado en las tierras comunales de la comunidad campesina de Cancharani, posee un área de 6.5 hectáreas. Desde el 2010, la Gerencia de Residuos Sólidos de la MPP tuvo la intención de cerrar este botadero porque contaba con el expediente técnico del relleno sanitario, pero éste se ejecutaría ocho años después debido a la falta de presupuesto. En el **PIGARS municipal 2013-2018** (2012) se detalló el procedimiento para el cierre, trazándose como meta su clausura para el 2014 por los impactos negativos que provocaba al medio ambiente y entorno social.⁴ Aunque, la municipalidad no consideró el impacto que el cierre del

3 Estas ciudades son: Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Andahuaylas, Yauyos, Bagua, Tarapoto, Talara, Puno, Huacho, Chíncha, Sullana, Piura, Paita, Sechura, Moyobamba, Chachapoyas, Ferreñafe, Tumbes, Nuevo Chimbote, Santiago, Huánuco, Huamanga, Aymaraes, Abancay, Azángaro, Ilave, Juliaca y Puerto Maldonado.

4 Los lixiviados generados por el botadero de Cancharani afectaron las fuentes de agua existentes en el sector. Este problema se agudizaba en la época de lluvias, provocando enfrentamientos entre los comuneros de

botadero tendría en las actividades económicas y dinámicas locales existentes.

De acuerdo con el directorio nacional de Centros Poblados del INEI, la población de la comunidad campesina de Cancharani es de 176 personas, aunque los miembros de la junta directiva indicaron que hay 67 familias y un total de 301 habitantes que residen de forma permanente en la comunidad, mientras que otro grupo de comuneros lo hace en la ciudad, pero no pierden su vínculo porque participan en actividades sociales como las “faenas comunales”. La población adulta es bilingüe (quechua y castellano) y las actividades económicas principales son el pastoreo y aquellos que residen en la ciudad se dedican a la docencia, los negocios y el comercio.

La apertura del botadero tuvo un impacto considerable en las actividades económicas de los comuneros porque la segregación de residuos complementó los ingresos generados por el pastoreo. Los comuneros decidieron organizarse y fundar su propia asociación de recicladores. Aprendieron a preparar, recolectar, segregar y almacenar los residuos, sin embargo, debido a los escasos recursos y desconocimiento de la normativa, la organización no tuvo un reconocimiento oficial; tampoco contaban con equipos de protección personal ni herramientas para la manipulación de los materiales. En un principio reciclaban botellas de plástico y caucho, después, trabajaron con papeles, metal, bolsas de plástico, cables, etc. (Huaracha & Calcina, 2018). Esta organización llegó a contar con 48 miembros que reproducían las prácticas sociales comunales a través de las redes de parentesco (consanguíneo y espiritual) y semejanzas socioeconómicas. Esta asociación, al compararla con otras organizaciones de recicladores de la ciudad de Puno, mantenía una cohesión social más sólida entre sus miembros frente a las segundas porque lo comunal primaba sobre lo individual (Huaracha & Calcina, 2018).

Con la construcción del relleno sanitario en el sector Itapalluni, ubicado a 12 km de la ciudad de Puno, la municipalidad comenzó con la segunda fase del proyecto: la clausura definitiva del botadero en Cancharani. Los comuneros lo sabían desde el 2010 y levantaron su voz de protesta, al igual que otras asociaciones de recicladores, porque para trabajar en el relleno sanitario debían formalizarse y asumir el costo de transporte de los materiales, el cual, era elevado y no les era rentable. Con la paralización todas las operaciones de segregación en el botadero, la asociación de recicladores de Cancharani tuvo que desactivarse. Frente a ello, los representantes de la municipalidad plantearon una alternativa: acordaron que la comunidad de Cancharani sería beneficiaria con la contratación de la mano de obra no calificada durante la etapa constructiva de la recuperación del área degradada.

A pesar del cierre del botadero, hubo ciertas operaciones informales dentro de éste. Al no existir cercos de seguridad ni vigilancia, algunos recicladores informales continuaron manipulando los residuos sólidos existentes. En otra ocasión, de acuerdo con los diarios locales, camiones segregadores de la ciudad de Juliaca depositaron cerca de 300 toneladas en el botadero; estos residuos provenían del centro comercial y, al parecer, su disposición ocurrió luego de una negociación informal con el exdirigente comunal, Bernardino Mamani, quien habría cobrado 600 soles por cada camión que dejaba residuos sólidos.⁵

Cancharani y la vecina “Mi Perú”. El pastoreo de animales es una actividad practica en el lugar, por lo que el consumo las aguas contaminadas y residuos sólidos les provocaba mucho daño. Hubo presencia diarreas en el ganado ovino, reticulitis traumática en el vacuno y obstrucción del tracto digestivo por consumo de plásticos en el caprino.

5 Fuente: <https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/30/puno-azangaro-se-queja-de-basura-que-le-deja-juliaca-lrsd%20> <https://radioondaazul.com/puno-denuncian-a-real-plaza-por-depositar-toneladas-basura-en-el-botadero-de-cancharani/> <https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/29/puno-exige-que-retiren-residuos-solidos-de-juliaca-lrsd>

Durante mi trabajo de campo, la junta directiva de la comunidad Cancharani se mostraba a favor del proyecto de recuperación del ex botadero, indicando que es una necesidad; pero también manifestaron que la comunidad de Cancharani sea la principal beneficiaria de proyecto a través de la contratación de mano de obra.

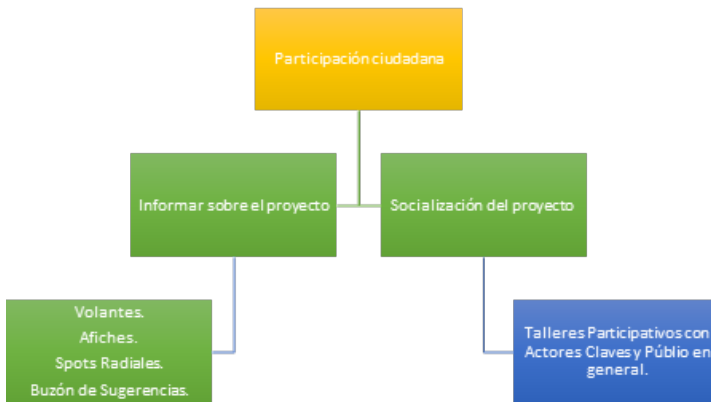
6 Los procesos de las mesas participativas

La empresa ganadora del diseño del proyecto fue la colombiana Hidrosuelos, iniciando sus actividades en abril del 2022. En coordinación con los especialistas de la municipalidad de Puno y la Unidad Ejecutora 003, Gestión Integral de la Calidad Ambiental (central y descentralizada) del MINAM, comenzaron con los estudios básicos como la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, descripción del área de intervención, el saneamiento físico legal, caracterización de los impactos ambientales y los mecanismos de participación ciudadana. Veamos este último punto.

6.1 Implementando los mecanismos de la participación ciudadana

De acuerdo con la **Guía para la formulación del Plan de Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales (2020)**, para desarrollar una adecuada participación ciudadana se debe identificar los principales problemas sociales, realizar un mapeo de actores e informar a la población que radica dentro del área de influencia. La transmisión de la información debe darse a través de la entrega de volantes, pegado de afiches, elaboración de spots radiales y colocación de buzones de sugerencias en zonas estratégicas. El siguiente paso es organizar una mesa de participación ciudadana cuyo fin es socializar el diseño del proyecto y los beneficios que trae consigo. En contextos donde existe población indígena⁶, la información debe traducirse a la lengua vernácula y utilizar un lenguaje adecuado para que el mensaje sea comprendido por la población beneficiaria.

Figura 2: Esquema general de la Participación Ciudadana



⁶ El convenio de la OIT 169, ratificado en la constitución política del Perú en 1994, establece tres criterios que permite la identificación de una población indígena: a) descendencia de un grupo que habitaba en el territorio antes de la conquista o colonización; b) conservación de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; c) conciencia de su propia identidad indígena. En el Perú, a pesar del reconocimiento del componente indígena, no se aplica mecánicamente a esta población debido a la discriminación y exclusión histórica del cual han sido víctimas. En la zona andina, los grupos sociales son reconocidas como "comunidades campesinas" y en la amazónica como "comunidades nativas" (Stella, 2021).

El flujo de la información y conocimiento de la población es fundamental para la participación ciudadana. En Puno, la distribución de los materiales informativos se realizó de la siguiente manera: Dentro del área de influencia directa, que comprendían las comunidades campesinas Cancharani y “Mi Perú” se repartieron volantes, pegaron afiches y se recabó información directa a través de encuestas. En el área de influencia indirecta, que es la ciudad de Puno, se dirigieron cartas a las distintas entidades públicas y privadas y se pegaron afiches en estos lugares, se elaboró un spot radial que fue transmitido en una radio local y en los camiones segregadores de basura y se publicó en la página de Facebook de la municipalidad de Puno. Toda la difusión se realizó por catorce días.

Figura 3: Publicación realizada en el Facebook de la MPP



Fuente: MPP

Figura 4: Actividades de campo en la C.C Cancharani

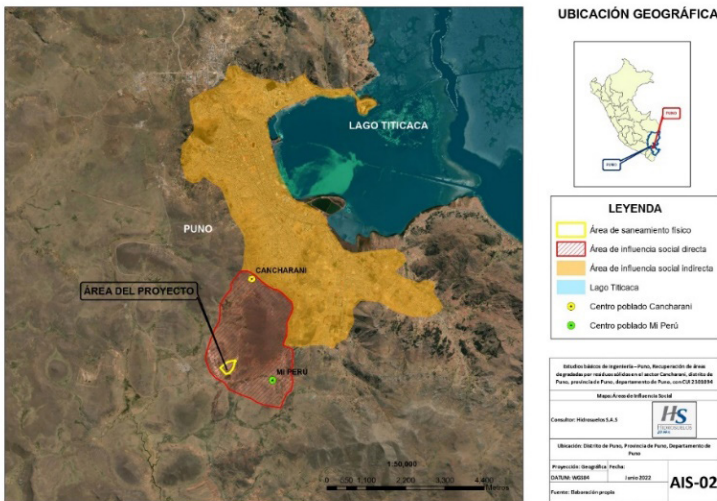


Fuente: Empresa Hidrosuelos, 2022

6.2 Delimitando a la población beneficiaria: una breve dificultad

Todo proyecto delimita su área de influencia, misma que está compuesta por una directa y otra indirecta. La diferencia entre ambas radica en que en la primera se identifican a aquellas poblaciones cercanas al proyecto y que pueden beneficiarse económicamente de las actividades derivadas de éste durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento; dentro del área de influencia directa se ubicó a las comunidades Cancharani y “Mi Perú”. Por otra parte, en el área de influencia indirecta, se ubican los centros urbanos más alejados y solo se beneficiarán de forma genérica del proyecto; en este caso, la ciudad de Puno está ubicada dentro de esta influencia indirecta.

Figura 5: Delimitación de las áreas de influencia social directa e indirecta



Fuente: Empresa Hidrosuelos, 2022

Al presentar la delimitación del área de influencia social a las autoridades locales, éstos pidieron una reconsideración porque, al estar el botadero en los terrenos comunales de Cancharani y tener tratos con ellos, quisieron excluir a “Mi Perú”. Durante las actividades de campo de la consultora, los comuneros de Cancharani opinaron de forma similar, es decir, ellos debían ser los únicos beneficiarios. Otras razones para buscar excluir a “Mi Perú” eran los conflictos con su junta directiva y la contaminación ambiental generada por el botadero. Como esto iba en contra de los mecanismos de la participación ciudadana, la consultora pidió que se envíe una carta pidiendo dicha exclusión, misma que se derivaría al MINAM con un informe; esta misiva nunca se envió porque cualquier responsabilidad, especialmente la política, recaería sobre ellos.

6.3 Desarrollo de las mesas de Participación

Las mesas de participación ciudadana se realizaron en el auditorio municipal de Puno y estuvo compuesta por cuatro partes: a) palabras de bienvenida por parte de la autoridad municipal y los representantes del MINAM; b) socialización del proyecto a cargo de la empresa consultora; c) espacio para preguntas, comentarios y sugerencias por parte del público participante y d) firma de acta de cierre.

Figura 6: Registro de los participantes a la Mesa de Participación Ciudadana



Fuente: Empresa Hidrosuelos, 2022

El alcalde no pudo participar por las actividades propias de su cargo, por ello, el gerente de la Unidad de Residuos Sólidos municipales fue quien dio las palabras de bienvenida. De la misma forma, el especialista técnico de la Unidad Ejecutora 003 local habló sobre la importancia de este proyecto para la ciudad. Después, la empresa consultora realizó la descripción del proyecto, expuso los diseños, explicó sobre los impactos ambientales y comentó sobre el plan de manejo ambiental; toda la exposición se realizó en castellano. Una vez concluida, se abrió el espacio para las preguntas, comentarios y sugerencias respecto a la exposición.

En este apartado me interesa la posición de los comuneros de Cancharani porque son conscientes de que su nivel de poder es bajo en comparación con otros participantes que provienen de entidades técnicas. También reconocen que sus conocimientos empíricos no son del todo equivalentes con los técnicos o académicos de otros participantes, sin embargo, su posición dentro del área de influencia social directa, así como su condición de comunidad campesina, le proporciona una posición política diferente al resto

Comenzaron su participación utilizando fórmulas retóricas como el “desconocimiento”, “ignorancia” y “aprovechamiento” para colocar el botadero en los terrenos comunales en la década de los ochenta. En la actualidad, esto ha cambiado porque muchos comuneros cuentan estudios superiores y técnicos, así como la experiencia, para comprender la normativa y los aspectos técnicos de los proyectos, buscando negociar mejores beneficios. Cuestionaron las acciones de la MPC porque, a lo largo de los años, habían tenido un sinnúmero de reuniones y acuerdos que nunca se materializaron y los pocos que sí, no beneficiaron totalmente a la comunidad.

Los comuneros estaban a favor de que el proyecto se realice a través de una empresa privada porque era “más confiable” aunque, resaltaron, se “mantendrían vigilantes”. Por último, al estar el botadero en sus tierras, ellos debían ser los principales beneficiarios con la contratación de mano de obra local no calificada y que el área recuperada no podía ser declarada zona intangible sino volver al control comunal, porque ellos no habían donado los terrenos sino cedidos para un propósito que ya había terminado. Frente a estas intervenciones, los miembros de la consultora se comprometieron en tratar estos puntos, aunque no de forma individual sino articulada con la municipalidad

de Puno y el MINAM, instituciones involucradas en la gestión, ejecución, operación y mantenimiento del proyecto. Terminadas las intervenciones, se firmaron las actas de cierre y concluyeron las mesas de participación ciudadana.

Figura 7: Participación de la presidenta de la comunidad de Cancharani



Fuente: Empresa Hidrosuelos, 2022

Figura 8: Participación de los comuneros de Cancharani



Fuente: Empresa Hidrosuelos, 2022

7 Las razones detrás de la participación política de la comunidad de Cancharani

Con la implementación de políticas de desarrollo, el objetivo era que los países adopten los valores y principios de la modernidad, es decir, formas concretas de orden, racionalidad y actitud individual (Escobar, 1999). Estos principios pueden observarse en el desarrollo de las mesas de participación ciudadana porque, al ser entendido como un mecanismo democrático, busca que los sujetos tomen decisiones “responsables” por el bien del proyecto porque impactará de forma positiva en sus vidas. Desde las ciencias sociales esta posición ha sido criticada porque no se toman en consideración las características del espacio, relaciones de poder, jerarquías ni prácticas locales. Al buscar implementar un elemento externo a un espacio que posee diversas prácticas y racionalidades que responden a las necesidades locales, la misión de ésta termina tergiversada.

Volviendo al tema de investigación, una de las preguntas que surgieron fue la elección del espacio para el botadero. En las décadas de 1970 y 1980, la ciudad de Puno tuvo un crecimiento acelerado y las autoridades debían pensar un lugar final para la disposición de los residuos. Usualmente, éstos son ubicados en zonas periféricas, pero

también existen otros indicadores que juegan un papel fundamente en esta elección. Los espacios rurales son percibidos como “pobres”, “subdesarrollados” y “lejanos”. Los comuneros consideran que la municipalidad los engañó porque ellos no tenían idea del impacto que provocaría el botadero en sus vidas porque un espacio “natural” pasó a ser “contaminado”, donde los rótulos de marginalidad y pobreza profundizó más la brecha que tenían con el Estado.

Las autoridades locales, a través de sus proyectos urbanísticos, buscaron integrar a las distintas comunidades campesinas a la economía de mercado para así transformar sus hábitos y costumbres e insertarse en estas cadenas de consumo; estas acciones no solo justificaban el desarrollo, sino que “prevenía” la extinción de las comunidades. A partir de la década de 1990, los grupos étnicos han sido reconocidos como grupos de derecho y con poder de decisión sobre su territorio, sin embargo, en lo que respecta los residuos sólidos, ellos no solo se ven afectados por la recepción de éstos, sino que se han convertido en generadores. Antes sus residuos, podríamos decir, se degradaban de forma natural (como los alimentos o excretas), pero con la inserción del plástico y otros productos externos, las formas tradicionales de eliminación ya no eran las más adecuadas. Es más, para la comunidad de Cancharani, esto les acarreó tensiones con otras comunidades aledañas.

La presencia del botadero en Cancharani impulsó a un grupo de comuneros a dedicarse a la actividad del reciclaje. La percepción sobre la basura está cambiando gracias a las políticas del reciclaje, insertando un nuevo valor económico y utilitario al residuo. Aún persiste el estigma sobre las personas que trabajan con los residuos, porque son percibidos como “sucios”, así como su asociación con la pobreza extrema, los recicladores no ven su trabajo como algo denigrante sino como productivo, rentable y eficiente al compararse con otros (como las actividades agrícolas o ganaderas). Los recicladores trabajaban de forma libre e independiente; la proximidad del botadero a sus casas les permitió sincronizar sus actividades cotidianas con el reciclaje. Durante la etapa de operaciones del botadero, la imagen de las personas que laboraban ahí era una proyección de miseria y exclusión social, porque los recicladores eran vistos como pobres, víctimas del sistema y excluidos sociales. En contraste, los recicladores de Cancharani reclamaron el valor de su actividad porque permitía su subsistencia. Por esta razón, cuando se clausuró el botadero, las familias dedicadas al reciclaje no solo perdieron su fuente de trabajo, sino que ahora sí encajaban en esa perspectiva de pobreza extrema.

7.1 Gobernanza Híbrida del Botadero de Cancharani

A pesar de que el botadero está ubicado en las tierras de la comunidad de Cancharani, los comuneros no participaron en su administración porque era competencia de la MPP. Los informantes indicaron que la administración fue deficiente porque las acciones de la MPP fueron muy limitadas debido a una serie de factores (corrupción, falta de recursos, rotación de personal, cambio en la política, etc.). Esto dio pie a que, en la práctica, la gobernanza del botadero esté en manos de varios actores porque la relación entre el Estado y la sociedad se ha desarrollado a través de canales institucionales e informales. De acuerdo con Gerardo Damonte (2021), al definir al Estado como un grupo de relaciones sociales, es una arena donde diferentes actores luchan por el control sobre el poder y aparatos de gobernanza. Al ser conscientes de las limitantes estatales, las intervenciones son negociadas y coordinadas de forma interna. A esto, Damonte lo denomina “Gobernanza Híbrida” porque ocurre cuando los gobiernos buscan regular las prácticas locales y actores sociales, quienes, de forma consciente, siguen los marcos

formales e informales, por lo tanto, sus prácticas no son completamente formales o informales. Este tipo de relación entre un grupo específico y las autoridades estatales, marcadas por conflictos y negociaciones, dan forma a diferentes formas de entramados institucionales (Damonte, 2021)

En el botadero, a pesar de estar bajo la jurisdicción municipal, la autoridad sobre este espacio era negociado entre los distintos actores que trabajan con los residuos. Aquí identificamos a actores estatales, privados y organizaciones sociales de recicladores (formales e informales) cuya interacción daba pie a negociaciones por el control y autoridad sobre el botadero y evitar pugnas por el acceso a los residuos. Desde la institucionalidad, la municipalidad de Puno busca formalizar a los recicladores a través de diversos programas; pero en la práctica, no existe una única posición de los funcionarios municipales sobre el botadero y los recicladores informales. A pesar de que exista una desconfianza entre funcionarios municipales y los recicladores informales, las negociaciones llegaron a consensos porque todos estos actores están insertos en una serie de redes que permiten una suerte de cohesión porque se desarrollan solidaridades, favores y beneficios entre todos ellos. Como resultado, la actividad informal continuó desarrollándose de forma paralela a los programas de formalización del reciclaje.

Esta misma interacción se vio reflejada durante el desarrollo de las mesas participativas porque las jerarquías entre los actores se mantenían, sin embargo, las redes sociales establecidas entre ellos permitieron a los comuneros desplegar su capacidad de agencia para obtener mejores beneficios del proyecto. Al final, esto permitió que las partes involucradas lleguen a acuerdos para que el proyecto pueda ejecutarse.

7.2 El trabajo con residuos

Joshua Reno (2014) al hacer un análisis sobre los residuos sólidos, explica que la basura y deshechos humanos son objetos dotados de un fuerte simbolismo que está basado por factores sociales y materiales locales; espacialmente, éstos son ubicados fuera del ámbito social porque generan contaminación y polución, llevando a afectar al grupo humano. Mary Douglas, en su libro "Pureza y Peligro" (1973), propone que los desechos están dentro de un ordenamiento dualista como lo limpio/sucio, pureza/contaminado, por lo tanto, la basura es algo que no se quiere y debe ser descartado. Estudios posteriores han demostrado objetos que podrían ser categorizados como "basura" o "deshecho" no son interpretado de una misma racionalidad porque pueden poseer una utilidad y cumplir ciertas funciones. Reno (2014) pone de ejemplo las heces de ciertos animales, como el de las vacas, que son utilizados para actividades agrícolas. Este desecho adquiere un nuevo valor simbólico y cultural gracias al valor material que aporta a las actividades humanas

Catherine Alexander y Joshua Reno (2012) señalan el reciclaje permite la creación, recuperación y recreación de un objeto. Es importante estudiar el flujo de éstos porque se recuperan y transforman en espacios periféricos siendo reinsertados en los circuitos comerciales de los centros de poder. Aquí es donde se inserta el nuevo valor al objeto reciclado, pero no será la única, porque a lo largo del tiempo recibirá otras. Alexander y Reno (2012) consideran que el reciclaje no debe limitarse únicamente lo ambiental o material, sino que tiene un impacto en lo social porque interviene en las prácticas que definen a los grupos. Proponen por ello que, desde la etnografía, es posible determinar diversos impactos a partir de la transformación y reevaluación de materiales, objetivos, espacios y las personas que llevan a cabo estos procesos. La etnografía también permite

explicar cómo los procesos de reciclaje se desarrollan y que sus particularidades son el resultado de un nuevo contexto socioeconómico o por las relaciones sociales y de poder existentes o por el mercado a través de modificaciones, desarticulación y rearticulación del valor de los objetos. Al prestar atención a la impresionante variedad de experiencias en torno al reciclaje, es posible identificar los tipos de trabajo y formas de organización en torno a éste, abriendo un gran número de posibilidades, sin olvidar, las complejas y heterogéneas prácticas de reciclaje desarrolladas por las personas (Alexander y Reno, 2012).

Los comuneros de Cancharani aprendieron el valor de los residuos sólidos y participaron activamente en su comercialización, permitiendo una conexión de su lugar de residencia, considerado periférico, con múltiples espacios, con diversos niveles de poder, permite establecer precios de estos productos. Los recicladores de Cancharani también conocían el comportamiento del mercado, permitiendo una clasificación de los residuos en función de su valor económico mundial. Algo que resaltaron los comuneros fue que trabajar directamente con estos materiales no obtienen mucha recompensa, pero sí a los intermediarios y empresas quienes ganan diversas sumas porque insertan estos materiales en circuitos que van más allá del espacio puneño.

7.3 Construyendo consensos

Dentro de las actividades sociales implementadas por los proyectos, está la caracterización de la población que será intervenida. Uno de los instrumentos que nos permiten identificar el nivel de poder e interés frente al proyecto es la matriz de partes de interesadas o “mapeo de actores”; a través de esta caracterización, el equipo social puede desplegar una serie de estrategias para generar una posición favorable en torno al proyecto.

Como indicamos líneas arriba, utilizo el concepto de “Sociedad Política” para identificar a los actores sociales que asistieron a las mesas de participación ciudadana del proyecto. En un primer nivel, la interacción entre los actores está bajo los mismos marcos culturales y prácticas sociales; la diferencia entre ellos radica en el nivel de poder y corporación al cual pertenecen. Las interacciones entre ellos son de forma periódica, ya sea durante las visitas técnicas al botadero o reuniones en espacios institucionales. Las interacciones con actores externos, como la empresa gestora, son diferentes porque éstos no están familiarizados con los componentes culturales, étnicos o prácticas sociales locales; por lo tanto, las formas de interacción y negociación se realizó de manera formal y pública.

Durante el desarrollo de las mesas de participación, este tipo de interacciones continuaron reproduciéndose durante la fase de preguntas y comentarios, lo que dio pie a buscar mejores condiciones y beneficios. Por ejemplo, los comuneros de Cancharani expresaron su preocupación por los temas ambientales y los problemas que habían tenido desde la apertura del botadero en sus tierras. Este conocimiento sí se ajustaba a la narrativa y objetivos planteados en la mesa, sin embargo, de forma progresiva estos temas tomaron tintes políticos y económicos. Esta forma de respuesta permitió el cuestionamiento de ciertos “beneficios” del proyecto, porque no se ajustaban a sus necesidades económicas ni sociales. También, si la consultora ni municipalidad entraban a negociar, ellos obstruirían el acceso al botadero.

La mesa participativa la entiendo como un “ensamblaje” porque reúne componentes heterogéneos como los conocimientos técnicos con las prácticas e intereses locales. El resultado es un componente que parece completo y cuenta con una capacidad de agencia

porque no solo vincula elementos, sino que forja conexiones entre ellos. Lo interesante es que estos componentes pueden, como no, adherirse, así como elaborar nuevos. Por ejemplo, cuando los comuneros de Cancharani pidieron ser contratados como mano de obra no calificada para el proyecto, son conscientes sus peticiones no serán satisfechas del todo, pero se puede llegar a un punto medio; saben que las empresas vendrán con sus trabajadores, así como el sindicato pedirá un cupo específico; frente a este escenario, ellos buscaban involucrar a su gente en ciertos puestos. Por otra parte, a nivel interno, los comuneros deberán organizarse para ver quienes ocuparían esos puestos y cuánto tiempo los ocuparían.

Con la conclusión de las mesas de participación, algunos de estos acuerdos se materializarán para satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas.

8 Conclusiones

En este artículo, mi objetivo fue comprender la participación política de los comuneros de Cancharani durante las mesas de participación ciudadana de la etapa de diseño del proyecto de recuperación del ex botadero. Si bien ellos buscaron negociar mejores beneficios, con base en sus intereses particulares, estos estuvieron atravesados por el poder que tienen, la percepción que se tiene sobre ellos, las actividades económicas que desarrollan y su vinculación con diversos espacios de poder.

Al entender a las mesas participativas como “ensamblajes”, observamos que éste no es un espacio neutral o técnico donde los participantes dan sus opiniones para mejorar el proyecto sin que se convierte en un reflejo de las prácticas sociales y jerarquías existentes en el espacio público local. Algunos grupos sociales, como los comuneros de Cancharani, son conscientes de la posición en la que se encuentran, por lo que implementan una serie de estrategias para así negociar mejores beneficios. Es así como su participación no fue técnica sino política porque utilizaron la retórica que se utiliza sobre ellos, como “pobreza” o “periferia”, para alcanzar sus objetivos. Por otro lado, la autoridad sobre el proyecto es negociada porque no recae del todo en la autoridad estatal o la empresa privada, sino que es compartida entre los múltiples actores involucrados en la gestión de los residuos. Todos ellos están dentro de una compleja red social que combina lo formal, informal e ilegal. Los comuneros de Cancharani asumieron un rol activo durante la etapa del diseño y posterior etapa de ejecución de la obra.

9 Referencias

- Berner, E. (2010). Introduction: Participation between Tyranny and Emancipation. En G. e. Gomez, *Participation for What: Social Change or Social Control?* (págs. 1-7). The Hague: ISS and Hivos.
- Blundo, G. (2014). Seeing like a State Agent: The Ethnography of Reform in Senegal's Forestry Services. En T. Bierschenk, & J.-P. Olivier de Sardan, *States at work : dynamics of African bureaucracies* (págs. 69-90). Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Blundo, G., & Le Meur, P. (2009). Introduction: An Anthropology of Everyday Governance: Collective Service Delivery and Subject-Making. En G. Blundo, & P. (. Le Meur, *The governance of daily life in Africa : ethnographic explorations of public and collective services* (págs. 1-38). Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Borzel, T., Risse, T., & Draude, A. (2018). Introduction: Governance in areas of limited statehood. Conceptual clarification and major contributions of the Handbook. En T. Borzel, T. Risse, & A. Draude, *The Oxford Handbook of Governance and limit-*

- ed Statehood* (págs. 3-28). Oxford: Oxford University Press.
- Borzel, T., Risse, T., & Draude, A. (2018). Introduction: Governance in areas of limited statehood. Conceptual clarification and major contributions of the Handbook. En T. Borzel, T. Risse, & A. (. Draude, *The Oxford Handbook of Governance and limited Statehood* (págs. 3-28). Oxford: Oxford University Press.
- Bouju, J. (2009). Urban Dwellers, Politicians and Dirt: An Anthropology of Everyday Governance in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). En G. Blundo, & P.-Y. (. Le Meur, *The governance of daily life in Africa : ethnographic explorations of public and collective services* (págs. 143-170). Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Carhuatocto, O. (2023). *La consulta previa en el procedimiento de certificación ambiental en el Perú*. Lima: IDLADS.
- Chatterjee, P. (2007). *La Nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*. Lima: IEP.
- Cooke, B., & Kothari, U. (2001). The case for participation as tyranny. En B. Cooke, & U. (. Kothari, *Participation: the new tyranny?* (pág. 4). London: Zed Books.
- Coombe, R. (2007). The Work of Rights at the Limits of Governmentality. *Anthropologica Vol. 49, No. 2*, 284-289.
- Damonte, G. (2021). Limited state governance and institutional hybridization in alluvial ASM in Peru. *Resources Policy*, 102-118.
- Eckert, J., Behrends, A., & Dafinger, A. (2012). Governance – and the State: An Anthropological Approach. *Ethnoscripts*, 14-34.
- Escobar, A. (1999). Antropología y Desarrollo. *Maguaré N°14*, 42-73.
- Foucault, M. (2006). Governmentality. En A. Sharma, & A. (. Gupta, *The Anthropology of the State* (págs. 131-143). Oxford: Blackwell Publishing.
- Furniss, J. (2010). Private Sector Reform of Egyptian Solid Waste Management. En M. e. Gómez, *Participation for What: Social Change or Social Control?* (págs. 51-75). The Hague: ISS and Hivos.
- Gadea Montesinos, E. (2005). *Las Políticas de Participación Ciudadana: Nuevas formas de relación entre la Administración Pública y la ciudadanía. El caso de la ciudad de Valencia y su área Metropolitana*. Valencia : Servei de Publicacions.
- Gravano, A. (2016). *Antropología de lo Urbano*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Gupta, A. (2012). *Red Tape. Bureacracy, Structural Violence and Poverty in India*. Durham & London: Duke University Press.
- Gupta, A. (2013). Messy bureaucracies. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 435-440.
- Guzmán, M., & Macías Manzanares, C. H. (2012). El manejo de los residuos sólidos municipales: un enfoque antropológico. El caso de San Luis Potosí. *Estudios Sociales*, 235-261.
- Guzmán, M., & Macías, C. (2012). El manejo de los residuos sólidos municipales: un enfoque antropológico. El caso de San Luis Potosí, México. *Estudios Sociales vol.20 no.39*, 235-262.
- Hickey, S., & Mohan, G. (2004). *Participation: from tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development*. New York: Zed Books Ltd.
- Higueras Carrillo, S. (2020). *Transformaciones en el espacio social en el contexto de la gestión de residuos sólidos en la planta de tratamiento y el relleno sanitario de Pongor*. Lima: PUCP.
- Huaracha, P., & Calcina, M. (2018). *Mujeres recolectoras de residuos sólidos: una opción de trabajo autogenerado en la comunidad campesiona de Cancharani-Puno*. Puno: UNAP.
- Landa, L. (2004). *Waqamuwanku Haykumuyku. Nos llaman y entramos. Los modos de participación en el espacio rural: Cuzco y Apurímac*. Lima: IEP.
- Landa, L. (2004). *Waqamuwanku Haykumuyku. Nos llaman y entramos. Los modos de partici-*

- pación en el espacio rural: Cuzco y Apurímac*. Lima: IEP.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del Espacio*. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L.
- Medranda Morales, N. (2022). Democracia Participativa y participación ciudadana. En D. e. Matrone, *Política, Democracia y Participación Ciudadana. Aproximaciones teóricas desde la comunicación* (págs. 17-28). Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Murray Li, T. (2007). Governmentality. *Anthropologica*, 275-281.
- Murray Li, T. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Murray Li, T. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Olivier de Sardan, J.-P. (2009). State Bureaucracy and Governance in Francophone West Africa: An Empirical Diagnosis and Historical Perspective. En G. Blundo, & P.-Y. (. Le Meur, *The governance of daily life in Africa : ethnographic explorations of public and collective services* (págs. 39-72). Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Panfichi, A. (2007). Democracia y participación: el fujimorismo y los gobiernos de transición. En A. (. Panfichi, *Participación Ciudadana en el Perú: disputas, confluencias y tensiones*. (págs. 17-44). Lima: PUCP.
- Pinker, A., & Harvey, P. (2015). NEGOTIATING UNCERTAINTY: Neoliberal Statecraft in Contemporary Peru. *Social Analysis*, 15-31.
- Preciado, R. (2023). *La Mesa de diálogo de la provincia de Caylloma-Arequipa como teatro de negociación en la resolución de conflictos por los proyectos de desarrollo en minería y agroexportación*. Lima: PUCP.
- Preciado, R. (2023). *La Mesa de diálogo de la provincia de Caylloma-Arequipa como teatro de negociación en la resolución de conflictos por los proyectos de desarrollo en minería y agroexportación*. Lima: PUCP.
- Rice, S., & Patrick, S. (2008). *Index of State Weakness in the developing world*. Washington, DC: The Brookings Institution.
- Scott, J. (1998). *Seeing like a state : how certain schemes to improve the human condition have failed*. New York: Yale University Press .
- Stella, O. (2021). Complejidades en la identificación de pueblos indígenas a partir del criterio subjetivo de autoidentificación. En ,. A. Diez, *Perspectivas antropológicas de la Consulta Previa. Análisis de casos* (págs. 49-78). Lima: PUCP.